

Biden en su primer trimestre: primeros pasos para un país atribulado

ROBERT MATTHEWS

Traducción: Nuria del Viso

La toma de posesión de Joseph Robinette Biden, candidato del Partido Demócrata, como el 46° presidente de los Estados Unidos transcurrió en un gélido pero soleado 20 de enero de este año en Washington. El evento produjo un suspiro de alivio casi audible y una ola de optimismo cauteloso de que los últimos cuatro años de mala administración y abuso de poder del Gobierno habían sido reemplazados por, al menos, la apariencia de un gobierno responsable dirigido por personas aceptables. La división y la intolerancia internas lideradas por Trump parecían disminuidas, si no desterradas. Sin duda, esta elección marcó un alejamiento de la crueldad hacia los inmigrantes, el racismo orgullosamente exhibido en público, el desprecio por las normas de la democracia constitucional, la cooperación con otras naciones y un hipernacionalismo de “America First”. Al menos esto es lo que esperaba la mitad de la nación.

Sin embargo, la presencia de 25.000 guardias nacionales y miles de policías y personal de seguridad proporcionó un sombrío recordatorio de que esta no era la transferencia normal de poder que había caracterizado a EEUU a lo largo de sus 234 años de historia. Por primera vez, no se realizó de manera pacífica. Donald Trump y el Partido Republicano lanzaron un golpe de mano para anular los resultados de una elección presidencial ganada por el candidato demócrata por siete millones de votos en noviembre de 2020, que afortunadamente fracasó.

El 6 de enero, la campaña para deslegitimar las elecciones –que ya duraba un mes– orquestada por el perdedor que insistió sin pruebas en que la votación estaba corrompida por un amplio fraude, culminó en un

acto de terrorismo interno. El Congreso fue asaltado por una turba armada de casi mil partidarios de Trump el día fijado para el recuento oficial de los votos electorales presidenciales en el edificio icónico del Capitolio de EEUU.

La turba insurrecta aplastó a las escasas fuerzas de seguridad. Algunos eran simplemente matones racistas de derechas, pero todos creían que les habían

Si el nuevo gobierno no aborda adecuadamente la herida histórica del racismo en el país, podría descarrilar el resto de la agenda demócrata

robado las elecciones y que esta insurrección estaba justificada. Estaban seguros de que se había violado la Constitución, de que su Comandante en Jefe los había exhortado a emprender la “guerra santa” contra el infiel enemigo liberal y de que había respaldado su acción. Entre los manifestantes del Capitolio se destacaron varios grupos de ultraderecha y supremacistas blancos.

Nadie puede dudar ahora del racismo profundamente arraigado en el país y el nuevo auge de los movimientos de supremacía blanca, incluido un número inquietante en las fuerzas militares y policiales. De hecho, los investigadores del FBI han informado que el 22% de los miembros de los grupos de supremacistas blancos son militares activos o veteranos. Además, el número de incidentes violentos cometidos por estos grupos se ha triplicado entre 2018 y 2020. Si el nuevo gobierno no aborda adecuadamente la herida histórica del racismo en el país, podría descarrilar el resto de la agenda demócrata.

Crisis política/epistemológica

A diferencia de otros líderes en momentos críticos de la historia de EEUU, Biden no solo enfrenta una gran crisis interna o externa, sino una serie de crisis interrelacionadas. En los primeros puestos de su lista de tareas, Biden ha situado la crisis política del país. Según sus palabras, «nos enfrentamos a un ataque a la democracia y a la verdad».

El violento motín en el Capitolio también puso de relieve la profunda polarización política entre la población; sorprendentemente, contó con la colaboración de algunos representantes del Congreso de EEUU y la participación de al menos un miembro del Ministerio de Asuntos Exteriores. Millones de estadounidenses (60% de los vo-

tantes de Trump) hoy no solo justifican la violencia del Capitolio, sino que han aceptado la ridícula teoría de la conspiración de que el ataque de la turba fue realmente “una operación de bandera falsa” orquestada por demócratas y ejecutada por matones anti-Trump. Hay aún más evidencia de que cuatro años de Trump han catalizado la creciente desconfianza de un gran segmento de ciudadanos estadounidenses hacia el Gobierno, los medios de comunicación, la ciencia y la verdad misma. De hecho, han abrazado lo que algunos han llamado la era de la posverdad.

El juicio político de Trump por incitar a la violencia del 6 de enero y su predecible absolución por parte de los republicanos del Senado, unos esbirros y otros temerosos de Trump, solo ha subrayado la dificultad de hacer realidad la promesa de Biden de devolver la unidad y el bipartidismo al Gobierno en EEUU. El veredicto es un reconocimiento formal de que por ahora el Partido Republicano continuará como el partido de Trump, quien aún no reconoce a Biden como presidente.

Pero para evitar equívocos: la radicalización derechista del Partido Republicano y su conversión en un conjunto de obstruccionistas plagados de agravios y dispuestos a deshacerse de la democracia representativa para mantener su poder político es anterior a la presidencia de Donald Trump. Él fue simplemente el extravagante vehículo para un partido preparado durante más de tres décadas para caer bajo su dominio.

El legado más insidioso de Trump es haber convencido a millones de conciudadanos de dudar de la autoridad de la verdad, incluida la gravedad de una pandemia y las elecciones democráticas. Una mayoría de republicanos aún no cree que Biden sea el presidente legítimo. El nuevo presidente se enfrenta ahora a una realidad en la que casi la mitad del país es incapaz de saber que les están mintiendo, o no les importa, o incluso están felices con las mentiras siempre que refuercen su odio hacia la otra mitad y confirmen sus prejuicios, especialmente sobre la indignidad del otro lado.

Así, los últimos cuatro años han dejado EEUU inmerso en una lucha maniquea entre las creencias preconcebidas y la realidad, entre la fe y los hechos: una guerra de la población entre formas duales de entender el mundo. Es probable que la nueva administración no lo resuelva en el corto plazo; pero si esta crisis epistemológica no es confrontada y disminuida, podría bloquear efectivamente para Biden la resolución de las otras crisis.

Política de la obstrucción

Actualmente, la mayoría de los líderes políticos republicanos a nivel local, estatal y federal mantienen las recetas tácticas de los últimos treinta años de librar una guerra sin cuartel contra los demócratas y su agenda. En el Congreso hay un bloqueo republicano casi unánime de la legislación demócrata; en los estados gobernados por republicanos se oponen a las restricciones de la COVID-19 –como el uso de mascarillas y el distanciamiento social– generalmente respaldadas por los demócratas. Es allí donde la pandemia ha degenerado en una guerra político-cultural entre un concepto de libertad individual contra el sentido común y la seguridad pública.

Además, dado que los últimos treinta años han demostrado que en elecciones nacionales el Partido Republicano no puede ganar el voto popular, sus oficiales y adeptos prácticamente han abandonado la idea de la persuasión política a favor

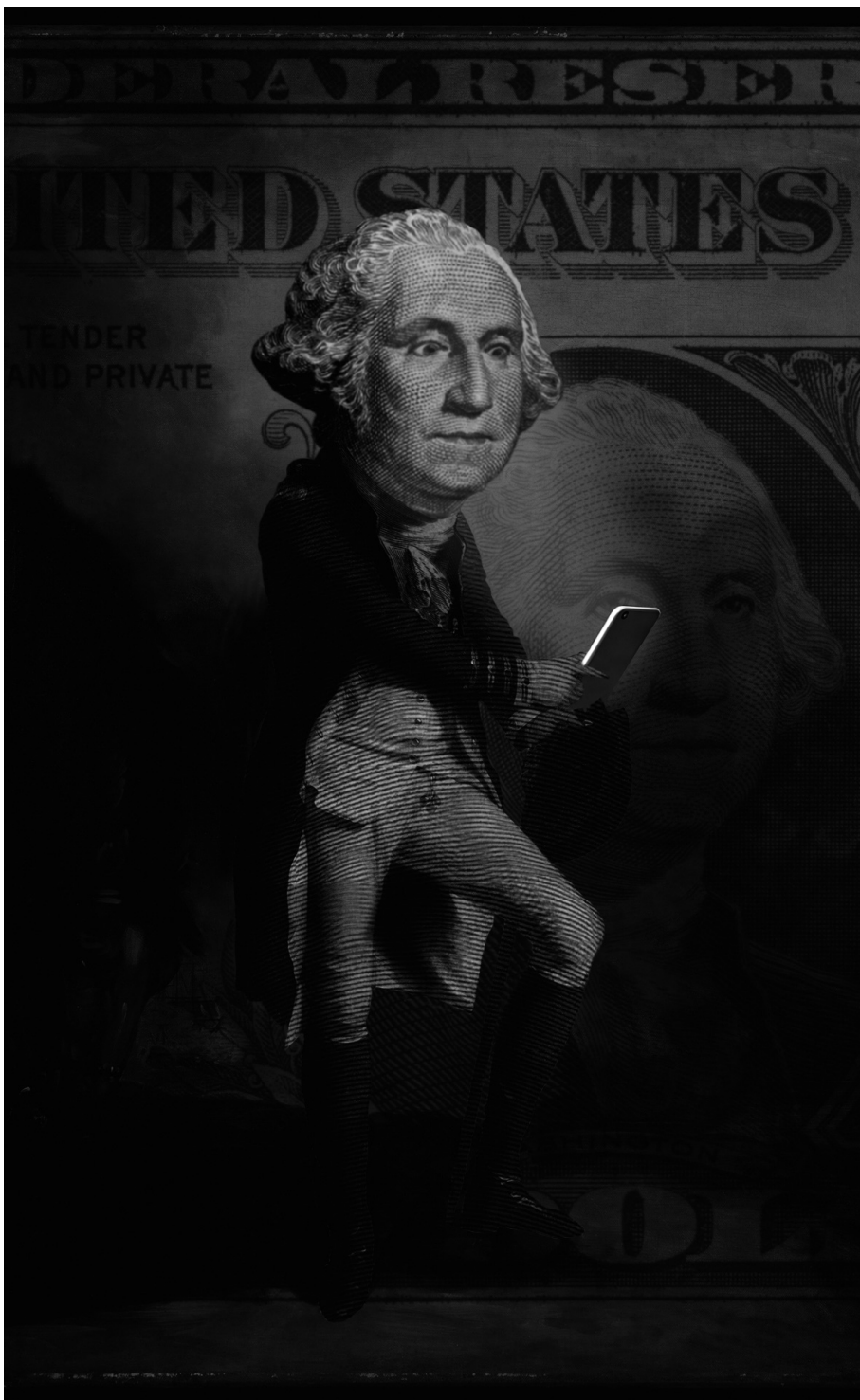
El legado de Trump es haber convencido a millones de conciudadanos de dudar de la autoridad de la verdad, incluida la gravedad de una pandemia

de reducir el sufragio. Este esfuerzo incluye actualmente leyes de supresión de gran número de votantes. Por ejemplo, los legisladores estatales republicanos en 44 estados han presentado más de 250 proyectos de ley que restringen el derecho de voto en lo que va de 2021; en cambio, el número de estos proyectos de ley fue de 35 en seis estados doce meses antes. En respuesta, la administración y los demócratas en la Cámara de Representantes

tienen dos proyectos de ley de derecho de voto en marcha para contrarrestar estos procesos y el 7 de marzo Biden firmó una orden ejecutiva que facilita la votación. Pero esta batalla está lejos de terminar.

La promesa de unidad de la campaña de Biden ya se está poniendo a prueba y es tiempo de reconsiderarla. El Gobierno ya no puede evitar los constantes rechazos republicanos a la cooperación, (mientras se quejan de que Biden y los demócratas son muy parciales); por tanto, es inútil pensar que los demócratas van a encontrar apoyo legislativo entre los republicanos. En encuestas recientes, más del 40% de los votantes republicanos dicen que no quieren negociar o comprometerse con los demócratas.

Esto va acompañado de una división entre los demócratas: los moderados buscan legislar políticas centristas bipartidistas mientras que los progresistas están bastante



dispuestos a seguir adelante unilateralmente con políticas y programas más izquierdistas y pasar por alto los republicanos. Las trampas de un partido con esta división se pusieron de manifiesto en las negociaciones para aprobar el proyecto de ley sobre la recuperación de la COVID-19. En un Senado dividido en partes iguales

EEUU está inmerso en una lucha maniquea entre creencias preconcebidas y realidad, entre fe y hechos: una guerra entre formas duales de entender el mundo

(que otorga a la vicepresidenta Harris voto de calidad) y donde es necesario cada voto demócrata, los demócratas centristas utilizaron su influencia para diluir el paquete y reducir de 400 a 300 dólares el subsidio semanal de desempleo. Es posible que la tarea de “unidad” de Biden se vea recortada no solo por la intransigencia republicana sino algo también por la división demócrata.

Las otras crisis

En el acto de inauguración de la nueva presidencia, además de la crisis política de EEUU y el “racismo sistémico”, Biden habló de otras “crisis en cascada”: un virulento virus, una creciente desigualdad social y económica, “un clima en crisis” y respecto al exterior, el declive del papel hegemónico y la credibilidad de EEUU. Debido a que la prioridad sigue siendo controlar la pandemia y proporcionar alivio y recuperación económicos, inevitablemente Biden ha prestado menos atención a otras áreas de preocupación.

Sin embargo, en los últimos dos meses, Biden no ha tenido reparos en traducir sus promesas de campaña en acción. En cuanto al cambio climático y la protección del medio ambiente, su esfuerzo más destacado hasta ahora ha sido la orden ejecutiva del 20 de enero, inmediatamente después de tomar posesión como presidente, de unirse al Acuerdo de París para limitar el calentamiento global.

La administración también está trabajando con el director de la Agencia de Protección Ambiental estadounidense (EPA) y los departamentos de Energía e Interior del Gabinete para deshacer la negligencia y los esfuerzos de desregulación de la administración Trump.

A mediados de febrero, a instancias del presidente, los demócratas del Congreso presentaron un amplio proyecto de ley de inmigración que contempla un proceso

de ocho años hacia la ciudadanía. De hecho, en su primer día en el cargo, Biden puso fin a la política de Trump de “quedáos en México” y ordenó una revisión del programa de asilo. La Casa Blanca también envió otro proyecto de ley al Congreso para proporcionar 4.000 millones de dólares de ayuda para abordar las “causas fundamentales de la emigración”. Sin embargo, desde grupos humanitarios se ha criticado levemente que el Gobierno se esté moviendo con demasiada cautela en materia de inmigración, ya que el Ejecutivo teme las consecuencias políticas de que un cambio repentino en la política estadounidense podría catalizar una gran afluencia de migrantes al país que aún lucha contra una pandemia. Para mediados de marzo, en efecto, hay una crisis naciente, con 100.000 inmigrantes detenidos en la frontera con México.

Por otro lado, la administración está apoyando un proyecto de ley demócrata para abordar la justicia racial y la violencia policial contra las personas racializadas, especialmente afroamericanas: la “ley George Floyd de Justicia en la Policía”. Biden tiene una ambiciosa agenda de justicia penal, que incluye poner fin a la pena de muerte por delitos federales. Para un país con el 4% de la población del mundo y el 25% de las personas encarceladas, la reforma penitenciaria de EEUU es otro de los asuntos urgentes. En enero, Biden emitió dos órdenes ejecutivas al respecto, pero una reforma fundamental implicará batallas legislativas. Si no se aborda adecuadamente el problema de la justicia racial, policial y penal, pueden repetirse las protestas nacionales de 2020, descarrilando otras partes de la agenda de Biden.

El lamentable estado de carreteras, puentes, transporte, etc. en comparación con otros países desarrollados fue un tema completamente ignorado por Trump. Por ende, Biden está presionando para que se debata en el Congreso un proyecto nacional urgente de infraestructuras. La medida se encuentra actualmente en las etapas de planificación para obtener un difícil apoyo bipartidista.

El sentido de premura de Biden está justificado ya que todavía hay muchos obstáculos para convertir estas iniciativas en ley. Dados los esfuerzos republicanos pasados para obstaculizar la legislación demócrata en los comités y consciente de las lecciones de los primeros dos años de Obama – cuando trataban inútilmente de negociar con los republicanos–, el nuevo presidente está trabajando con una profunda comprensión de que cualquier demora demócrata va en su propio detrimento.

Crisis de salud. Biden ha pospuesto algunos de los eventos y obligaciones habituales de alto perfil de los primeros cien días presidenciales para abordar con energía visible las crisis gemelas más urgentes del país: la pandemia y el declive económico, inclusive la pérdida de empleo. Además, el presidente todavía está lidiando con las secuelas de un desastre sanitario heredado de Trump. Durante varios periodos de 2020 su administración había carecido de voluntad o competencia para combatir el virus, y el mismo Trump a veces había tratado la pandemia con una indiferencia enfermiza.

Actualmente, EEUU todavía tiene el peor historial de lucha contra el virus de cualquier país industrializado. Con el 4% de la población mundial, el país tiene el 22%

EEUU está inmerso en una lucha maniquea entre creencias preconcebidas y realidad, entre fe y hechos: una guerra entre formas duales de entender el mundo

de los casos y muertes por COVID-19. En comparación, la tasa de mortalidad, por ejemplo, en India, que tiene una población de 1.300 millones de personas y una infraestructura de salud pública inferior, es aproximadamente una décima parte de la de EEUU. En Nigeria, con una población de unos 200 millones, la tasa de mortalidad informada es menos de una centésima parte de la que se registra en EEUU. En una nación que lidera el mundo

en ciencia, avances médicos y desarrollo epidemiológico, el fracaso más asombroso y abyecto de la administración Trump fue su mala gestión de la pandemia del coronavirus en 2020, creando una crisis innecesaria.

Biden ha evaluado correctamente la pandemia como una prioridad de seguridad nacional. A pesar de un sistema constitucional que diluye el papel del gobierno federal en muchos casos y la oposición republicana a nivel estatal, el presidente ha emitido varios mandatos ejecutivos y ha enviado recomendaciones urgentes para una variedad de medidas de seguridad, incluidos las indicaciones sobre mascarillas.

El equipo de Biden está invirtiendo en habilitar lugares de vacunación, ha más que duplicado el ritmo de las inoculaciones (dos millones diarias para marzo) y anunció que habrá suficientes vacunas disponibles para todos los adultos estadounidenses para fines de mayo. El progreso se refleja en el apoyo público a la administración: el 6 de marzo, la aprobación popular de Biden se situó en el 60% y su gestión del coronavirus en el 70%, incluido un 44% de los republicanos.

Finalmente, está la traba considerable de la polarización política en la que los republicanos rechazan tanto la gravedad de la pandemia como las soluciones propuestas. Así pues, este partido es para Biden es una barrera para afrontar el virus: una encuesta reciente encontró que el 41% de los votantes republicanos (y el 49% de los hombres) aseguraron que no se vacunarían.

Así, un legado perdurable de Trump es que enseñó a sus seguidores a tratar lo que en 2020 fue la principal causa de muerte en EEUU como un tema partidista. En cualquier caso, el resultado es que en este momento un tercio de los adultos estadounidenses, incluido un tercio de los trabajadores de la salud y los militares, se muestran reacios a vacunarse, aún más alto entre los afroamericanos y aquellos con bajos salarios.

Crisis económica. Biden y el Congreso liderado por los demócratas también han centrado su atención en la doble prioridad de reforzar la economía en decadencia y rectificar la pérdida récord de empleos en 2020. Con disminuciones diarias en los casos de virus, la economía de EEUU muestra actualmente signos de vida. La tasa oficial de desempleo ha caído al 6,2%, lentamente recuperando los más de 10 millones de trabajos que se perdieron desde el año pasado. Sin embargo, la desigualdad en este país sigue siendo la más aguda entre las naciones desarrolladas. Y sigue empeorando: el crecimiento anual medio del PIB durante los últimos veinte años es siete veces mayor que el de los salarios que se han estancado en menos de un tercio del porcentaje anual. Asimismo, desde 2000 la Bolsa ha crecido a una tasa media anual del 9%, una ganancia que ha beneficiado mayoritariamente a la población acomodada.

El historial de las minorías raciales y étnicas proporciona estadísticas aún peores. Por ejemplo, hoy la población afroamericana tiene un escaso 10% de los activos nacionales de la población blanca. Las poblaciones afroamericanas e hispanas en EEUU también se vieron perjudicadas de manera desproporcionada tanto por el virus como por las consecuencias económicas. La brecha de desigualdad en salarios, ingresos y activos, que ha venido creciendo desde 2000, empeoró aún más en 2020.

El paquete de alivio al coronavirus. La piedra angular de la agenda 2021 de Biden para abordar las razones tanto próximas como estructurales detrás de la crisis económica es el *American Rescue Plan Act of 2021* (Ley del Plan de Rescate

Americano). Esta legislación histórica, que contempla 1,9 billones de dólares de ayuda, fue aprobada a mediados de marzo después de duros y crispados debates, sin el apoyo de ningún representante republicano de la Cámara de Representantes o del Senado.

El proyecto de ley otorga ayuda –350.000 millones– a los gobiernos estatales y locales, severamente afectados por la pandemia, escuelas, universidades, hospitales, pequeñas empresas –400,000 de las cuales cerraron durante la pandemia–, ayudas al pago del alquiler y el cuidado infantil, e inversiones en transporte y otras reformas de infraestructura. Además, ofrece ayuda financiera a familias con dificultades a través de pagos directos en efectivo por un monto de 1.400 dólares y pagos por desempleo hasta agosto, al tiempo que crea iniciativas para ayudar a quienes viven en la pobreza –34 millones de estadounidenses–, familias de bajos ingresos y también de clase media. Pero en particular, tendrá un efecto enorme en la lucha contra la pobreza infantil, con el objetivo de reducirla a la mitad para fines de 2021.

La legislación pone de manifiesto la voluntad de Biden de utilizar el poder del Ejecutivo para abordar las disparidades económicas anteriores y actuales; es un punto de referencia para un cambio drástico en la dirección del Gobierno. «Este proyecto de ley brindará más ayuda a más personas que cualquier otra iniciativa que haya realizado el gobierno federal en décadas», declaró el líder de la mayoría en el Senado, Charles Schumer. El socialista demócrata Bernie Sanders, ahora presidente del Comité de Presupuesto del Senado, lo denominó «el proyecto de ley más progresista que haya visto aprobarse desde que estoy aquí [en Washington]». Así, podría ser un comienzo para que los demócratas unieran una mayoría política en este país profundamente polarizado alrededor de una renovada creencia en el papel del gobierno y su capacidad de resolver problemas fundamentales.

Conclusión

El Plan de Rescate Americano para aliviar los efectos sanitarios y económicos del coronavirus se encuentra entre las leyes más populares en décadas; es más popular incluso que los recortes de impuestos de Trump de 2017. El día en que se aprobó en el Congreso, el 80% de los estadounidenses se mostró favorable o pensaba que aún era demasiado reducido. Esto hace que la oposición republicana

sea políticamente sorprendente, pero algo menos cuando se comprende su actual rigidez ideológica. La intensa y unánime oposición a esta medida por parte de los legisladores republicanos subraya la especie de dualismo maniqueo que caracteriza a los dos partidos, pero también revela la distancia entre los líderes republicanos y sus partidarios de base que aún sufren los efectos de la pandemia.

Debido a esta polarización paralizante, el camino hacia el éxito de la administración Biden probablemente sea largo, accidentado y sinuoso. Sin embargo, hay indicios de que la hostilidad inquebrantable de la oposición puede estar produciendo una reafirmación en las creencias políticas del Partido Demócrata, sin las ambigüedades pasadas entre los simpatizantes, y a la vez provocando una alternativa “izquierdista” discernible. Los demócratas pueden ofrecer la posibilidad de la cooperación republicana, pero cuando no se materializa, parecen estar listos para lanzarse hacia adelante para ganar o perder. En el proceso ayudan a señalar al otro grupo como los obstruccionistas en los que se han convertido, y presentan a los demócratas como un partido de intencionalidad y principios.

En efecto, la adopción de una agenda demócrata clara en contraposición al extremismo republicano puede ser la estrategia más eficaz para ganar el apoyo popular y lograr los objetivos de la administración, algo que Obama aprendió demasiado tarde. Recientemente, Biden, históricamente considerado un centrista y pragmático, puso de manifiesto en qué medida él y el partido se han desplazado hacia la izquierda en respuesta al extremismo derechista de Trump y los republicanos, y en reconocimiento de la creciente izquierda del partido y la energía y combatividad de los progresistas, principalmente jóvenes.

En un discurso del 28 de febrero que aparece como un importante hito, Biden defendió el derecho de los trabajadores de Amazon a organizarse y advirtió que «no debe haber intimidación, coacción, amenazas o propaganda antisindical». El economista Nobel Paul Krugman declaró que fue «el discurso más pro-sindical pronunciado jamás por cualquier presidente estadounidense moderno, tal vez por cualquier presidente de EEUU». Esto puede ser otra indicación de un gobierno demócrata diferente de las épocas de Clinton y Obama.

El espectro que acecha a Joe Biden y su administración, quizá para todo su mandato, es el “Partido” Republicano, su difusión de la gran mentira y su objetivo declarado de obstruir virtualmente cualquier iniciativa que los demócratas

promuevan. Esto podría producir una pesadilla legislativa y situar a la administración en un atolladero, pero las circunstancias adversas de hoy también pueden endurecer la espina dorsal del Gobierno de Biden lo suficiente como para lograr victorias políticas durante los próximos dos años y convencer al electorado estadounidense de la valentía y el compromiso de la administración para cumplir sus promesas de campaña. Esta tendencia ya es visible en las acciones iniciales de la Casa Blanca y los demócratas en el Congreso. El efecto en el público podría proporcionarles algunas sorpresas en las elecciones de mitad de período del Congreso en 2022.

Robert Matthews fue profesor de Historia y Política de América Latina en la New York y actualmente es asesor de la política de EEUU en el Seminario de Investigación para la Paz (SIP) de Zaragoza.

